

Asunto: Petición Ministerio de Defensa.

Nº Expte.: 001-075706.

Fecha: 09/02/2023.

Con fecha 09/01/2023 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información pública formulada por [REDACTED], al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número 001-075706.

En dicha solicitud se requiere lo siguiente:

“El pasado 8 de diciembre el diario ARA informó sobre un chat de militares del cuartel del Bruc de Barcelona en qué se sorteaba los servicios de una prostituta. La ministra Margarita Robles dijo que de confirmarse los hechos, los militares tendrían que dejar el ejército. El pasado 29 de diciembre el ministerio informó que se habían identificado los responsables y se tomarían medidas, sin especificar cuáles serían. Solicito:

1. Saber cuántos militares (servidores públicos) se identificaron como responsables del sorteo y los comentarios vejatorios.
2. ¿Qué rango ocupaban estos militares?.
3. ¿Qué medidas se han adoptado respecto a ellos?.
4. ¿Han sido expulsados del ejército?
5. Si han sido trasladados a otra unidad, ¿dónde han sido trasladados?
6. ¿Qué se les atribuye?.”

Con fecha 19/01/2023 se determinó que la competencia para la resolución de esta solicitud correspondía al ámbito del Ejército de Tierra.

Una vez analizada la solicitud deducida por [REDACTED], el Estado Mayor del Ejército considera que procede denegar el acceso a la información solicitada.

En relación con los hechos objeto de la solicitud de información se señala que cuando el Ejército de Tierra tuvo conocimiento, decidió enviarlo a la Fiscalía. Por ello, dado que el asunto está judicializado y teniendo en cuenta que el artículo 14.1. e) de la LTAIBG establece que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para "La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios", no procede dar más información que la señalada.

Sí que se desea señalar que estos hechos denunciados no responden ni representan los valores de las Fuerzas Armadas en general, ni del Ejército de Tierra en particular.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la

presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

EL GENERAL SEGUNDO JEME

- Alejandro Gonzalo Escámez Fernández -